

Más allá de la pobreza

Trabajo y exclusión social en El Salvador

Saira Johanna Barrera

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas,
El Salvador
sbarrera@uca.edu.sv

María José Erazo Fernández

Investigadora independiente, El Salvador
majoerazo1@gmail.com

Fecha de recepción: 16/12/2024
Fecha de aceptación: 15/4/2025

Resumen

Este artículo aborda la exclusión social como enfoque alternativo al de pobreza y problematiza el rol del trabajo como vía de inclusión en El Salvador. Se basa en una investigación orientada a comprender de manera amplia y multidimensional el vínculo entre la dinámica laboral y la exclusión social, y propone un Índice de Exclusión Social (IES) para el país. Desde la perspectiva teórica de Pérez Sáinz (2012), se plantea que la exclusión primaria y la erosión de la ciudadanía social consolidan la exclusión. La metodología es cuantitativa e incluye el diseño del IES. Se registra un aumento de la exclusión social en 2023 (65%) respecto del promedio 2009-2019 (53%).

Tramas
y Redes
Jun. 2025
Nº8
ISSN
2796-9096

Palabras clave

1| Crecimiento económico 2| Trabajo 3| Exclusión 4| Ciudadanía social 5| Pobreza

Cita sugerida

Barrera, Saira Johanna y Erazo Fernández, María José (2025). Más allá de la pobreza: trabajo y exclusión social en El Salvador. *Tramas y Redes*, (8), 127-165, 80db. 10.54871/cl4c80db



Esta obra está bajo licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es_AR

Além da pobreza: trabalho e exclusão social em El Salvador

Resumo

Este artigo analisa a exclusão social como abordagem alternativa à pobreza e problematiza o papel do trabalho como via de inclusão em El Salvador. Baseia-se em pesquisa que busca compreender de forma ampla e multidimensional a relação entre a dinâmica laboral e a exclusão social, propondo um Índice de Exclusão Social (IES) para o país. A partir da perspectiva teórica de Pérez Sáinz (2012), considera-se que a exclusão primária e a erosão da cidadania social consolidam a exclusão. A metodologia é quantitativa e inclui o desenho do IES. Os resultados indicam aumento da exclusão social em 2023 (65%) em relação à média 2009-2019 (53%).

Palavras-chave

1| Crescimento económico 2| Trabalho 3| Exclusão 4| Cidadania social 5| Pobreza

Beyond poverty: labor and social exclusion in El Salvador

Abstract

This article analyzes social exclusion as an alternative approach to poverty and questions the role of labor as a path to inclusion in El Salvador. It is based on research aiming to broadly and multidimensionally understand the relationship between labor dynamics and social exclusion, and proposes a Social Exclusion Index (IES) for the country. Drawing on Pérez Sáinz's (2012) theoretical perspective, it argues that primary exclusion and the erosion of social citizenship consolidate exclusion. The methodology is quantitative and includes the design of the IES. Results show an increase in social exclusion in 2023 (65%) compared to the 2009–2019 average (53%).

Keywords

1| Economic growth 2| Labor 3| Exclusion 4| Social citizenship 5| Poverty

Introducción¹

En 2023, el 30,3% de las personas en El Salvador declaraban un ingreso mensual insuficiente para adquirir dos canastas básicas alimentarias (CBA), es decir, era pobre por ingreso. Este porcentaje muestra una mejora en comparación con el año 2000, cuando era del 44% (Banco Mundial, 2024, p. 19). Esta medición, aunque limitada, sugiere que esa problemática social se ha reducido en el país. Ello es así porque la pobreza por ingreso sigue siendo la medida más utilizada para referirse al fenómeno de la pobreza en El Salvador, incluso cuando, a partir de 2015, se estima también la pobreza multidimensional, la cual se ubica en un 25% en 2023 (Banco Mundial, 2024, p. 29).

No obstante, la discusión sobre la pobreza ya sea por ingreso o multidimensional, se ha concentrado en cómo medirla mejor y no en dilucidar qué la ocasiona y la perpetúa. Las premisas teóricas y metodológicas subyacentes a la medición del fenómeno y, además, las deficiencias en los indicadores usados como umbrales para la pobreza en El Salvador (Pleités, 2021, pp. 485-493 y Departamento de Economía UCA, 2019, pp. 23-26); dejan en la oscuridad el carácter social, relacional y procesual del fenómeno y sus vínculos con la dinámica del trabajo en el país, además de sobreestimar el bienestar de la población. En ese contexto, ha ganado terreno la investigación sobre la exclusión laboral y social en El Salvador (Barrera, 2022; Chacón, 2020; Chacón et al, 2013).

Este artículo se inscribe en este último tipo de estudios y es un aporte para superar las limitaciones del enfoque de pobreza. El punto de partida es el cuestionamiento sobre la manera en la que se vinculan las diferentes dimensiones de la exclusión social y el mundo del trabajo en El Salvador. El objetivo perseguido es comprender de manera amplia y multidimensional el vínculo entre la dinámica laboral y el proceso de exclusión social y, además, proponer una medición alternativa con un Índice de Exclusión Social (IES).

La exposición se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se ahonda en las diferencias entre el enfoque de exclusión social y la perspectiva de la pobreza.

En la segunda parte se expone la metodología para estimar el índice de exclusión social (IES) con el que se estima la exclusión social de las personas trabajadoras en El Salvador en el periodo de interés (2009-2019 y 2023). Este índice, a su vez, contempla tanto la escala de inserción

Tramas
y Redes
Jun. 2025
Nº8
ISSN
2796-9096

SAIRA JOHANNA BARRERA
MARÍA JOSÉ ERAZO FERNÁNDEZ

1 La investigación *Dinámica laboral y exclusión social en El Salvador 2009-2019*, que se encuentra en la base de la producción de este artículo, fue realizada gracias al Fondo de Investigaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.

laboral como la escala de ciudadanía social. Los hallazgos de cada escala se exponen en los apartados tercero y cuarto, respectivamente.

Finalmente se comparten las conclusiones que derivan de la investigación y las fuentes consultadas.

La perspectiva de la exclusión frente a la perspectiva de la pobreza

La medición de la pobreza en El Salvador se basa en la comprensión de este fenómeno como una cuestión de resultados del proceso económico: no haber logrado un mínimo de ingreso, por un lado, o tener insatisfechas cierto tipo de necesidades más allá del nivel de ingreso, por otro (ONEC, 2024, pp. 44-45).

Esta aproximación epistemológica y metodológica deja “sin identificarse aspectos relacionales que subyacen a la condición de pobreza, es decir, condiciones y dinámicas sociales desfavorables, tales como discriminación y exclusión” (Castro, 2020, p. 82). A su vez, este vacío de conocimiento sería parte de la explicación de la ineficacia de las políticas para erradicar o disminuir significativamente la problemática en la región centroamericana, provocando “entre los funcionarios, frustración, y entre la población, desesperanza” (Pérez y Mora, 2007, p. 195).

Por su parte, Pérez y Mora sostienen que “la pobreza está signada por la exclusión” (2007, p. 9). Y la exclusión social refiere a un proceso doble de generación de desigualdades extremas dentro de los denominados mercados básicos (entre ellos, el mercado de capitales y el mercado de trabajo): la exclusión primaria, por un lado; y la crisis de los Estados de bienestar, por otro. Este último proceso se traduciría, entre otras cosas, en erosión de la ciudadanía social (Pérez Sáinz, 2012).

La exclusión primaria engloba elementos que colocan a las personas en situación de desventaja en el mercado de trabajo (desempleo o precariedad laboral, por ejemplo); o de capitales (emprendimientos de sobrevivencia que no avanzan a escalas mayores). Esta situación desempodera de manera extrema a las personas (Barrera, 2022, p. 52).

Para el caso salvadoreño, Chacón, retomando los aportes de Pérez Sáinz (2012), estimó que el 84% de la población económicamente activa se encontraba en situación de exclusión laboral (2020, p. 81). Este hallazgo llama la atención sobre la relación entre exclusión social y exclusión laboral e invita a centrar la atención en los procesos de desempoderamiento que se originan en los mercados capitalistas (Pérez Sáinz, 2012, pp. 27-28).

El segundo proceso de generación de desigualdades y desempoderamiento es la crisis de los Estados de bienestar y del mercado de

trabajo alrededor de los años 80 (Pérez Sáinz y Mora Salas, 2007) lo que, además, coincide con la implementación de ajustes estructurales y con la consolidación del modelo neoliberal como vía de crecimiento económico.

Uno de los elementos característicos del neoliberalismo es la redefinición del papel del Estado en la economía y, en El Salvador como en otros países de la región, esto significó un mayor debilitamiento de su capacidad financiera, institucional y política para ofrecer bienes, servicios u otras garantías sociales o económicas a la población.

Precisamente este debilitamiento estatal está fuertemente relacionado con el concepto de ciudadanía social, que se entiende como el piso social mínimo aceptable en términos de bienestar material y de valores civilizatorios, con la que se trata de llegar a la inclusión social (Pérez Sáinz, 2012, p. 35). Por ejemplo: el acceso a salud y educación de calidad, la tenencia de una vivienda en condiciones adecuadas o la tenencia de artículos como computadora con acceso a internet son, en el momento actual, elementos para una ciudadanía social presente.

A su vez, la ciudadanía social presente, activa, sería un medio para aliviar las desigualdades propias del funcionamiento de los mercados básicos, es decir la exclusión primaria, y evitaría que esta última se consolidara como exclusión social y que bloqueara los avances en materia de pobreza por ingreso y de mayor inclusión.

Sin embargo, la capacidad neutralizadora de la ciudadanía social no es ilimitada ni está garantizada, ya que está condicionada, en parte, por la implementación de determinadas políticas sociales básicas del Estado establecidas como pilares fundamentales. Si estas políticas son ineficientes en su objetivo nivelador o son inexistentes la exclusión primaria se consolida como un proceso de exclusión social (Pérez-Sáinz, 2012, p. 37).

La ciudadanía social también juega un papel fundamental respecto de la dinámica entre los pares categóricos de género, ya que podría suavizar o profundizar las desigualdades entre hombres y mujeres en los mercados básicos y en las respectivas esferas productivas y reproductivas (Pérez Sáinz, 2014). Un ejemplo sería la existencia y eficacia de una política nacional de cuidados que trastocara la distribución preexistente de los trabajos remunerados y no remunerados entre hombres y mujeres haciéndola más equitativa.

La estimación de la exclusión social asociada al trabajo en El Salvador

El reto de medir la exclusión social con las aristas mencionadas previamente se concretó con el Índice de Exclusión Social (IES), que explica el

proceso mediante el cual se genera la exclusión, poniendo el énfasis en los mercados básicos como origen de las desigualdades de excedente, especialmente el mercado de trabajo; y evidenciando la relación que este tiene con la ciudadanía social en el proceso de consolidación de la exclusión. El IES, además, permite identificar cuáles variables específicas están ocasionando los cambios en los resultados de exclusión social y en cuál aspecto se ubica: en la inserción laboral o en la ciudadanía social.

La información principal proviene de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) que es recopilada por la Oficina Nacional de Estadística y Censos (ONEC) de forma anual, con una muestra que abarca todo el territorio salvadoreño y que da seguimiento a la evolución de los principales indicadores sobre la condición de vida de la población a nivel nacional (Digestyc, 2020).² La estimación se realizó, en un primer momento, entre 2009 y 2019, abarcando el período post crisis financiera de 2008 y el año previo a la pandemia por COVID-19, para analizar los resultados del modelo en condiciones normales. Posterior a este ejercicio, se replicó la metodología para 2023, el último año con información disponible, con el objetivo de identificar un empeoramiento o mejora de las condiciones de la fuerza de trabajo ampliada posterior a la pandemia y la crisis inflacionaria de 2022.

La unidad de análisis de la investigación son las personas de 16 años o más que se encontraban trabajando o buscando trabajo (lo que comúnmente se conoce como población económicamente activa o fuerza de trabajo) o que se encontraban fuera de la fuerza de trabajo por razón de trabajo doméstico y de cuidados. A esta población se le denominará fuerza de trabajo ampliada. Los resultados se exponen para la fuerza de trabajo ampliada en su conjunto, por sexo, área geográfica de residencia y situación ocupacional.

El IES es un índice compuesto, con información de 30 indicadores³ para estimar 11 variables dentro de 5 dimensiones distintas (ver Figura 1). Estas dimensiones se agrupan en dos escalas principales,

2 Esta información se complementó con registros administrativos de la Policía Nacional Civil (PNC) concerniente a la tasa de homicidios anual por departamento, entre 2010 y 2019, y 2023, y la tasa de participación electoral por departamento para la elección presidencial de 2009, 2014 (primera vuelta) y 2019 de acuerdo con las Estadísticas Electorales del Tribunal Supremo Electoral. La información electoral para 2023 no estaba disponible al momento de esta estimación.

3 A continuación, se enlistan los indicadores utilizados:

Escala de inserción laboral: Relación ingresos por ocupación principal y la Canasta Básica Ampliada (CBA) por persona; Participación en el mercado de trabajo; Forma de inserción al mercado de trabajo; Persona con un segundo empleo; Posee contrato de trabajo; Recibe aguinaldo; Cotización a la seguridad social; Seguridad ocupacional; Tenencia de un local; Capacidad de contratar mano de obra.

tomando como referencia la propuesta metodológica de Pérez et al. (2012): la escala de inserción laboral y la escala de ciudadanía social. Ambas escalas van del 1 al 3, donde 1 es la situación más desfavorable y 3 es la situación más favorable. Cada indicador fue diseñado en formato de variable dicotómica, y tomarán valores de 0 y 1. Cuando hay presencia de un factor excluyente en un indicador, se coloca 1, y cuando no, se coloca 0.

Dentro de cada escala, se suma la cantidad de factores excluyentes para cada persona. No se utilizó un criterio de ponderación definida para cada factor excluyente debido a la falta de criterios objetivos para ponderar de manera distinta los indicadores. A partir de esta sumatoria, se agrupa a la población según la presencia de un mayor o menor número de factores excluyentes mediante un Análisis de Conglomerados de K-medias.

La ventaja de utilizar esta herramienta estadística para agrupar a la población es que es un criterio objetivo para establecer los cortes de los valores extremos de cada categoría, a partir de la misma dispersión de la muestra, y se asegura que cada categoría sea más similar al interior y más distinta de las otras. Además, el Análisis de Conglomerados de K-medias permite definir *a priori* las categorías o grupos resultantes. Así, se garantiza que las escalas estén conformadas por tres categorías: en la categoría 1 se encuentra la población en la situación más desfavorable y excluyente, en la categoría 2 la población en una situación intermedia y en la categoría 3 la población en una situación más favorable e incluyente. En esta lógica, en la categoría 1 se encontraría la población con una mayor presencia de factores excluyentes, mientras que en la categoría 3 aquellas personas con una menor presencia de estos.

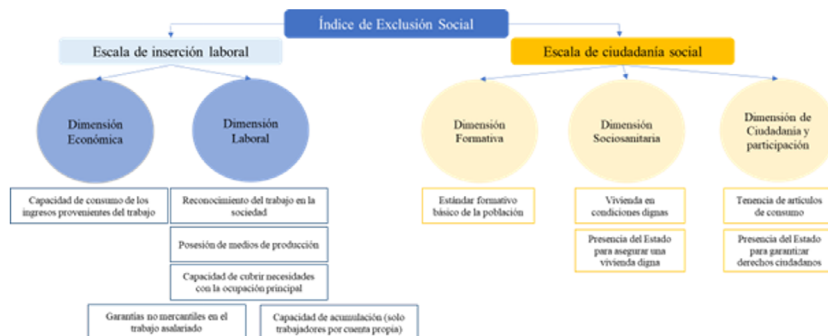
Así, el IES combina elementos de una escala y una tipología. Se calcula como una escala continua, donde el puntaje refleja el grado acumulativo de exclusión social. Sin embargo, para facilitar su interpretación, los valores han sido agrupados en categorías cualitativamente distintas, estableciendo una tipología que permite diferenciar niveles de exclusión. Este enfoque es común en índices multidimensionales como

SAIRA JOHANNA BARERA
MARÍA JOSÉ ERAZO FERNÁNDEZ

Escala de ciudadanía social: Nivel educativo con relación al nivel educativo obligatorio completo; Capacidad de leer y/o escribir; Suficientes habitaciones por cada miembro del hogar; Tipo de vivienda; Techo de materiales adecuados; Paredes de materiales adecuados; Piso de materiales adecuados; Vivienda con servicio sanitario; Vivienda con alumbrado eléctrico; Vivienda con abastecimiento de servicio de cañería público; Tiene vehículo; Tiene televisor; Servicio de televisión por cable en el hogar; Computadora en el hogar; Servicio de internet en el hogar; Utiliza el celular; Residencia en departamentos con una tasa de participación electoral menor a la media nacional; Residencia en departamentos con tasa de homicidio mayor a la media nacional; Persona recibe subsidios estatales; Inexistencia de políticas de corresponsabilidad de los cuidados.

el IDH o el IPM, que combinan medición continua con clasificación en grupos, permitiendo un análisis detallado y aplicable a la formulación de políticas públicas (De Vaus, 2002; Jenkins y Van Kerm, 2014).

Figura 1. Dimensiones y variables del IES



Fuente: elaboración propia.

Después de haber obtenido cada escala, se utiliza otra vez el Análisis de Conglomerados por K medias para sintetizar estas dos escalas en un solo indicador compuesto, que es el IES. Como Schuschny y Soto (2009) señalan, este tipo de análisis también es útil para agregar indicadores. Se definen 9 categorías para obtener las 9 combinaciones posibles de la mezcla de las dos escalas (3x3) y se sintetizan en cuatro grandes categorías del IES según el siguiente detalle y acorde a las siguientes definiciones:

Tabla 1. Selección de casos para el índice de inclusión/exclusión social

	Ciudadanía social ausente	Ciudadanía social flotante	Ciudadanía social presente
Exclusión primaria	Exclusión social consolidada	Exclusión social latente	Inclusión social flotante
Inclusión primaria flotante	Exclusión social consolidada	Inclusión social flotante	Inclusión social mínima
Inclusión primaria	Exclusión social latente	Inclusión social flotante	Inclusión social mínima

Fuente: elaboración propia.

Se hace referencia a la *exclusión social consolidada* cuando convergen las situaciones de mayor desventaja en ambas escalas, haciendo referencia a la imposibilidad de la ciudadanía social de paliar los efectos de la exclusión primaria. Por su parte, una *exclusión social latente* es cuando hay cierta

ventaja en el mercado de trabajo o en materia de ciudadanía social pero no es suficiente para superar la exclusión.

La *inclusión social flotante* se da cuando hay cierto avance en ambas escalas, pero su situación es vulnerable ante shocks externos o impactos macroeconómicos. El carácter flotante también se captura en ambas escalas por separado. Por último, en *inclusión social mínima* estaría la población que goza de una participación plena en la sociedad bajo los estándares definidos y los supera; y donde la ciudadanía social potencia los beneficios de la inclusión primaria.

La escala laboral en el proceso de exclusión social

En la escala de inserción laboral se evidencia la forma de participación de la población en edad de trabajar en el mercado de trabajo. En esta escala es relevante distinguir indicadores para las personas empleadoras, asalariadas, trabajadores por cuenta propia, desempleadas y personas trabajadoras domésticas no remuneradas (TDNR), pues cada categoría implica distintos niveles de desempoderamiento inicial y distintas trayectorias que pueden determinar la inclusión/exclusión primaria.

La definición de esta escala lleva implícito un concepto amplio de trabajo que no se limita al empleo remunerado, entendiendo el trabajo doméstico y de cuidados como un trabajo fundamental para posibilitar la vida, y su falta de reconocimiento e infravaloración como un factor excluyente para las personas que lo llevan a cabo. En una estimación convencional de la fuerza de trabajo, estas personas quedan fuera de los cálculos, por ello se ha definido la fuerza de trabajo ampliada (FTA), como la población económicamente activa más la población denominada *población económicamente inactiva* por razón de trabajo doméstico y de cuidados.

De acuerdo con los resultados de la escala, la mitad de los integrantes de la FTA se encuentra en exclusión primaria durante la década (2009-2019). En dicho período, había 2.2 personas en exclusión primaria por cada persona en inclusión primaria. Para 2023, esta situación empeoró, predominantemente por la reducción del número de personas en inclusión primaria flotante a la mitad, lo que evidencia precisamente el carácter vulnerable o *flotante* de este segmento ante shocks internos, como la pandemia por COVID-19 en 2020 y la inflación sin precedentes de 2022.

Tabla 2. Resultados de la escala de inserción laboral. Comparativo 2009-2019 y 2023

Escala de inserción laboral	Exclusión primaria		Inclusión primaria flotante		Inclusión primaria	
	2009-2019	2023	2009-2019	2023	2009-2019	2023
Periodo						
Hombres	30.4%	52.1%	41.2%	18.2%	28.4%	29.7%
Mujeres	62.7%	69.6%	20.7%	11.1%	16.6%	19.3%
Área urbana	42.6%	54.3%	28.1%	15.0%	29.3%	30.7%
Área rural	57.4%	73.5%	33.0%	13.4%	9.6%	13.1%
Empleadores	0.0%	0.0%	28.9%	35.5%	71.1%	64.5%
Asalariados/as	11.3%	49.4%	42.7%	12.6%	46.0%	38.0%
Trabajadores por cuenta propia	43.2%	50.7%	53.8%	33.8%	3.0%	15.5%
TDNR, familiares auxiliares y desocupados/as	100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Total FTA	48.0%	61.6%	30.0%	14.4%	22.0%	24.0%

Fuente: elaboración propia con base en las EHPM y registros administrativos.

La persistencia de una exclusión primaria mayoritaria se explica principalmente por una prevalencia de condiciones laborales precarias, bajas remuneraciones y poco acceso a derechos laborales básicos, así como una mayoría de trabajadores por cuenta propia sin oportunidades de acumulación y una importante proporción de la población desempleada y TDNR. Lo anterior es resultado, por un lado, de las políticas neoliberales aplicadas en el país y en la región desde principios de la década de los 90 y a lo largo del siglo XXI (Barrientos, 2019), que apuntaron a la flexibilización laboral y a la desregulación del mercado de trabajo, y que dejaron a la población trabajadora a merced de la autorregulación del mercado.

La desprotección laboral se ha recrudecido con la llegada y permanencia de Nayib Bukele en la presidencia de El Salvador desde 2019 hasta la actualidad, ya que su política económica se ha concentrado en la atracción de inversión extranjera a través de acuerdos opacos, exenciones tributarias y el incumplimiento de la actualización del salario mínimo.⁴

A esto se le añade una importante condición de partida de que la mayoría de las personas ocupadas (62,9% en promedio) no posee más que su fuerza de trabajo para sobrevivir, lo que indica una importante barrera en el acceso a los medios de producción.⁵ Su concentración en pocas manos configura un terreno desigual por la pugna por el excedente y desencadena procesos de desempoderamiento extremo, por lo que no es extraño que las remuneraciones en el mercado de trabajo sean extremadamente bajas. En el período de estudio, el 61,6% en promedio de las personas no poseían una remuneración igual o mayor a la canasta básica necesaria para costear su propia vida y la de sus dependientes.

4 Ver Alvarado (2024); Barrera (2024); Moreno (2024); WOLA (2022).

5 De acuerdo con el estudio “El Estado de la MYPE 2024: La Otra Cara de la Economía” de FUSAI (2024), el 95,3% son microempresas en el país, por lo que incluso esta estimación subestima la concentración de los medios de producción capitalistas.

Sin embargo, las formas de insertarse al mercado de trabajo son heterogéneas y existen personas con una relativa ventaja. Pérez Sáinz (2014) señala que durante la década de los 50 y 60, en un período de modernización del Estado, se promovieron ciertas garantías no mercantiles para la población asalariada, principalmente del sector público en expansión, y eso generó escalones o jerarquías entre los mismos trabajadores. Aún en la etapa neoliberal, la población asalariada se encuentra en una relativa mejor posición que las personas trabajadoras por cuenta propia.

Si se agrupa únicamente a la población asalariada en función de los factores excluyentes dentro de la escala, se encuentra que la mayoría está en una posición de inclusión primaria flotante o inclusión primaria, mientras que, en el caso de los trabajadores por cuenta propia, la mayoría está en exclusión primaria o en inclusión primaria flotante. No obstante, los hallazgos indican que seis de cada diez asalariados no poseían contrato de trabajo, el 73,4% no recibía aguinaldo, el 55,9% no cotizaba a la seguridad social y el 57,8% trabajaba en condiciones peligrosas. Esto evidencia que los derechos laborales básicos son todavía inaccesibles para un importante sector de asalariados.

En el caso de las personas trabajadoras por cuenta propia, los resultados indican que sus emprendimientos no sobrepasan la etapa de subsistencia, ya que el 89,4% no poseía un local fijo donde realizar sus actividades productivas y comerciales y tres de cada cuatro (75,9%) no puede contratar mano de obra, por lo que sus ingresos dependen primordialmente de su propia fuerza de trabajo. Más aún, los ingresos de estos trabajadores son significativamente menores a los de la población asalariada.

Lo anterior reconfirma que, aunque heterogéneas, las personas trabajadoras se encuentran en una situación generalizada de desempoderamiento extremo y exclusión primaria. Esto desafía la idea de que el tener un empleo es requisito suficiente para estar incluido en la sociedad, pues es posible participar de manera excluida en el mercado de trabajo. Por otra parte, esta situación es más desalentadora cuando se analiza por género.

En primer lugar, la invisibilización del aporte de los cuidados para la sostenibilidad del sistema y su falta de remuneración excluye a una tercera parte de la población (34,1%), la gran mayoría mujeres (Federici, 2018), del acceso a los mercados básicos, lo que consolida su exclusión primaria de partida.⁶ No obstante, incluso cuando las mujeres logran

SAIRA JOHANNA BARERA
MARÍA JOSÉ ERAZO FERNÁNDEZ

6 En este sentido, se le da el mismo tratamiento estadístico que a las personas desempleadas y trabajadores familiares auxiliares.

acceder a estos mercados, lo hacen en una situación de desventaja (Erazo y Aguilar, 2023).

La división sexual del trabajo es una forma de repartir las tareas de la sociedad entre hombres y mujeres en la cual las mujeres son relegadas a actividades relacionadas a los cuidados (preparación de alimentos, comercio, servicios, enseñanza, salud, reparación de vestimenta, etc.) que, al no estar igualmente valoradas en la sociedad, son peor remuneradas y con menores oportunidades de desarrollo y expansión (Peña y Uribe, 2013), mientras que los hombres se ocupan en actividades más productivas, de mayor crecimiento y mejor remuneradas (construcción, actividades financieras, telecomunicaciones, industria, etc.).

Esto explica que, en el período 2009-2019, la mayoría de las mujeres en promedio se encontraba en exclusión primaria, mientras que los resultados para los hombres son menos desfavorables, con una mayoría en inclusión primaria flotante. En 2023, las desigualdades se recrudecen. El área de residencia es otro factor que constituye una desigualdad de partida en el acceso a los mercados básicos. Según los resultados, es más difícil estar incluida si la persona vive en el área rural, pero en 2023, con el incremento de los precios de los alimentos, la exclusión primaria incrementó considerablemente.

Esto es herencia de un modelo agroexportador sumamente excluyente, en el cual los medios de producción de café (el monocultivo por excelencia del país) se encontraban concentrados en las manos de unas cuantas familias que utilizaban el abaratamiento del precio de la mano de obra agrícola como mecanismo para disminuir los precios y aumentar su competitividad en el mercado internacional. Sumado a lo anterior, se encuentra el posterior abandono del agro con el tránsito de los grandes capitales al sector financiero durante las reformas neoliberales (Barrientos, 2019).

Por último, es necesario hacer referencia a la trayectoria de la escala laboral a lo largo del tiempo (ver Anexo 1). En primer lugar, es importante destacar la poca variación de la proporción de personas que no pueden acceder a una canasta básica personal con sus ingresos provenientes del trabajo a lo largo de la década, lo que indica el carácter estructural de los bajos salarios en el país. En 2023, esta situación se mantuvo prácticamente invariante. Lo mismo sucede en el caso de la proporción de personas que poseen medios de producción y la proporción de personas

cuyo trabajo no es reconocido socialmente como trabajo. Estos aspectos medulares marcan la invariabilidad de la escala en el período estudiado⁷.

En cuanto a las *garantías no mercantiles* del trabajo asalariado (Pérez Sainz, 2014), las personas sin contrato de trabajo, aguinaldo y seguridad social se mantienen virtualmente iguales a lo largo de la década. En los indicadores para los trabajadores por cuenta propia, se percibe un leve deterioro de uno o dos puntos porcentuales entre 2009 y 2019, sin mayores altibajos entre estos años, empeorando en 2023 (pasó de 75,9% a 82,7% la cantidad de trabajadores por cuenta propia sin capacidad de contratar mano de obra).

La escala de ciudadanía social en la exclusión social

El carácter excluyente del proceso económico reflejado en la escala laboral previamente expuesta se acompaña de una ciudadanía social que ha sido ausente o flotante para el 79% de la FTA, tanto previo a la pandemia de COVID-19 como en los datos explorados en 2023.

El carácter ausente o flotante del ejercicio de ciudadanía social es indicativo de que las personas participan en condiciones desventajas de la dinámica social ligada a procesos de educativos, sociosanitarios o de consumo. Ejemplos de esa participación desventajosa sería: poseer un nivel educativo inferior al bachillerato, carecer de agua por cañería en la vivienda y carecer de internet residencial; que son algunos de los 20 indicadores contemplados en la propuesta de medición.

Los indicadores contemplados en esta escala tienen carácter estructural algunos, y otros tienen un carácter más coyuntural. Además, también se puede atribuir algunos de estos indicadores a la acción estatal, mientras que otros responden más a las dinámicas propiamente mercantiles. Esto es muy útil porque evidencia que no todo se puede mejorar en el corto plazo, ni todo puede ser resuelto por políticas estatales.

El carácter flotante de la ciudadanía social se ha manifestado al comparar la década previa a la pandemia en la que, en promedio, 51% de personas trabajadoras se ubicaban en esa categoría, con el año 2023 en el que se redujo a 39%. Esta reducción tiene su contrapartida en un incremento en la ciudadanía social *ausente*. Previo a la pandemia 28% se ubicaba en esta categoría, pero posterior a la pandemia ese número incrementó a 42%.

SAIRA JOHANNA BARBERA
MARÍA JOSÉ ERAZO FERNÁNDEZ

7 Cabe destacar que, en comparación con la década 2009-2019, en 2023 la cantidad de personas sin acceso a medios de producción pasó de 63% al 69,2%, y las personas con un segundo empleo pasaron de 3,8% (en promedio) a 4,8% en 2023.

Con lo anterior se verifica la fragilidad de la participación social de las personas trabajadoras, que tienen dificultades para solventar aspectos como incrementar el nivel educativo, mejorar las condiciones de su vivienda o adquirir ciertos bienes de consumo; y esa dificultad contrasta con la facilidad para los retrocesos ante eventos económicos como el desempleo, la inflación o la reducción en la inversión pública en educación, los cuales pueden derivar de fenómenos naturales contingentes (como la pandemia por COVID-19), o bien de las políticas públicas y el desarrollo de la dinámica capitalista en determinados contextos.

Precisamente desde la óptica de las políticas públicas, es ineludible relacionar mejoras y desmejoras en aspectos de la ciudadanía social con algunos aspectos característicos de la gestión gubernamental a partir de 2019: según las estimaciones realizadas, hay una notoria mejoría en la variable denominada “presencia del Estado para garantizar derechos”, específicamente en el indicador “residencia en departamentos con promedio de homicidios mayor a la media nacional”.

En la década 2009-2019, 50% de personas trabajadoras vivían en departamentos con una tasa de homicidios superior a la media nacional. Sin embargo, desde la entrada en vigor del Régimen de Excepción en marzo de 2022 hasta la actualidad, la tasa de homicidios ha descendido de manera notoria, de tal manera que en 2023 solo 6% vivían en departamentos con una tasa de homicidios superior a la media nacional.

Pero, desde otra perspectiva, la inexistencia o inoperancia de una Política nacional de cuidados sigue siendo un factor excluyente, especialmente para las mujeres, que conforman la mayor parte de la FTA. En esta materia hay estancamiento: 55% padecen la ausencia o inoperancia de esta política y eso no ha cambiado en el periodo considerado. También hay retroceso en la proporción de personas que reciben subsidios: en la década 2009-2019, un promedio de 26% personas trabajadoras no recibía ningún tipo de subsidio. En 2023 esa cantidad aumentó a 28%.

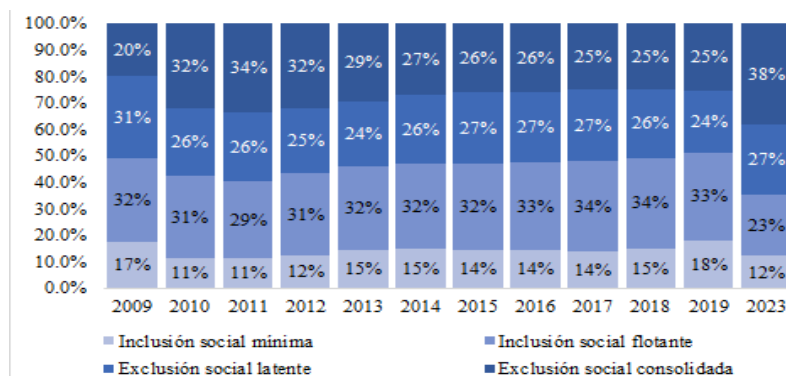
Como se ha mostrado, la incorporación de la escala de ciudadanía social en el análisis de la exclusión social obliga a mirar aspectos de la participación social más allá de los aspectos laborales. Se incorporan elementos que remiten al papel del Estado en la provisión de ciertos bienes y servicios públicos que, finalmente, marcan la pauta del carácter excluyente o no de la participación de las personas en la dinámica social. Esto es importante dada la mercantilización de derechos (Esping-Andersen, 1993) característica de la vía neoliberal de crecimiento adoptada por El Salvador desde 1989.

Además, el Estado se entiende como un espacio en el que los intereses de clases sociales permean de diversas maneras y se manifiestan, por ejemplo, en una estructura tributaria regresiva; en un gasto público

sesgado a seguridad o en la presencia o ausencia del Estado en la provisión de servicios como salud o educación (Álvarez y Barrera, 2018, pp. 33-34). En este sentido, la vía neoliberal adoptada para promover el crecimiento económico ha erosionado las finanzas públicas y la capacidad financiera e institucional del Estado para la provisión de servicios y la garantía de derechos económicos y sociales básicos de la población.

En términos generales, el IES para el período de estudio 2009-2019 dio como resultado una mayoría (53,2%) de la FTA en exclusión social consolidada (27,2%) o latente (26,2%), mientras que solo el 14,5% se ubicaba en una situación de inclusión mínima o flotante (32,2%). En ese sentido, la mayoría de la población se encuentra en una posición desempoderada, explicada por un mercado laboral excluyente y una ciudadanía social ausente, dejando a la mayoría expuestos ante vulnerabilidades por shocks externos y crisis. Esto es evidente al analizar el resultado de 2023: como resultado de los shocks externos entre 2020 y 2022, la exclusión social ascendió al 64,9%, principalmente explicado porque la población en inclusión flotante pasó a exclusión social latente o consolidada.

Gráfico 1. Índice de Exclusión Social (2009-2019) y 2023



Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

La propuesta analítica de la exclusión social aporta al mayor conocimiento de los aspectos del proceso económico y social generadores de pobreza y exclusión para las personas trabajadoras, ya que remite al proceso de desempoderamiento que ocurre en los mercados de trabajo y de capital, fruto de desigualdades de excedente; y a un ejercicio débil de la ciudadanía social, el cual se relaciona con la debilidad del Estado para proveer bienes

y servicios públicos (educación y salud) y con la dinámica mercantil de desigual acceso a ciertos bienes de consumo necesarios para una participación más plena en la sociedad, como el internet o la computadora.

Así, es posible afirmar que la situación de exclusión primaria de la fuerza de trabajo ampliada salvadoreña permaneció invariante durante la segunda década del siglo XXI y ha empeorado levemente en 2023, como consecuencia de shocks externos y la persistencia de un mercado de trabajo desregulado de facto. Además, se muestra evidencia de que el mercado de trabajo ha sido estructuralmente excluyente y heterogéneo, con importantes desigualdades entre personas asalariadas y trabajadores por cuenta propia (una forma de inserción al mercado laboral precaria y feminizada).

De esta forma, es posible afirmar que el derecho fundamental al trabajo no está garantizado y las condiciones de trabajo no permiten a las personas satisfacer sus necesidades y participar plenamente en la sociedad. Y esta situación es peor en 2023 que lo que era en la década 2009-2019. Además, a la amplia incidencia de la exclusión primaria, se suman las desventajas que las mujeres enfrentan por dedicarse al trabajo doméstico no remunerado, al trabajo por cuenta propia o bien, al trabajo asalariado en condiciones más precarias que los hombres. También se identifican desigualdades importantes entre las personas trabajadoras del área urbana y las del área rural.

Por el lado de la ciudadanía social se verifican mejoras sensibles en 2023 en aspectos como la seguridad ciudadana medida por el descenso en el número de homicidios, pero hay poco avance en aumentar la cantidad de personas que logran un nivel educativo igual o superior al bachillerato (más del 70% no lo logran), la cobertura de subsidios estatales y el tránsito hacia políticas públicas efectivas para promover la corresponsabilidad de los cuidados.

Así, los resultados muestran que los magros logros en ciudadanía social que derivan de las apuestas gubernamentales recientes no compensan la mayor exclusión primaria resultante de, por un lado, la dinámica económica neoliberal; y, por otro, de las apuestas gubernamentales recientes que profundizan las características excluyentes del crecimiento económico vigente.

Referencias

Alvarado, Moisés (2024, 12 de agosto). Las preguntas sin responder en el acuerdo por los puertos. *La Prensa Gráfica*. <https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/puertos-puerto-acajutla-la-union-el-salvador-nayib-bukele/1161621/2024/>.

- Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2024). *Mejorar vidas y medios de subsistencia: evaluación de la pobreza y la equidad en El Salvador 2024*. Washington, D.C.: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099120924111523990/pdf/P500656146605102a1a3d41a-577d289eac6.pdf>
- Barrera, Saira (2022). Empleo, salarios y exclusión social en El Salvador antes y durante el COVID-19. En Departamento de Economía UCA, *Análisis socioeconómico de El Salvador: Crisis, pandemia y elementos para pensar el desarrollo*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. https://www.uca.edu.sv/economia/wp-content/uploads/ASES_2022-Rv1.pdf
- Barrera, Saira (2024). Trabajar al máximo y vivir al mínimo: el salario mínimo en El Salvador. En Departamento de Economía UCA, *Análisis socioeconómico de El Salvador: año 2024*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. https://www.uca.edu.sv/economia/wp-content/uploads/ASES_2024.pdf
- Departamento de Economía UCA (2019). *Análisis Socioeconómico de El Salvador Un enfoque estructural 1985 primer trimestre 2019*. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. https://www.uca.edu.sv/economia/wp-content/uploads/ASES-EnfoqueEstructural_1985-2019_VW.pdf
- Barrientos, Ricardo (2019). El Salvador: una política fiscal diseñada como base y garantía para un sistema económico rentista y expoliador. En Aguilar, Isabel (Ed.). *Política fiscal: expresión del poder de las élites centroamericanas* (pp. 129-210). Guatemala: Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales [ICEFI].
- Castro, Alberto (2020). Esquemas de exclusión social: un recorrido conceptual para comprender. En José Nabor Cruz Marcelo (coord.), *Pobreza y desigualdades en México* (pp. 82-117). Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de Investigaciones Económicas. http://www.iiiec.unam.mx/publicaciones/libros_electronicos/pobreza-y-desigualdades-en-m%C3%A9xico-revisi%C3%B3n-te%C3%B3rica-y-ejercicios
- Chacón, Nathalie (2020). *Caracterización y determinantes de la exclusión laboral en El Salvador 2010- 2018*. Tesis de Maestría. Universidad Nacional Autónoma de México. https://ru.dgb.unam.mx/handle/DGB_UNAM/TES01000805689

- Chacón, Nathalie, De Paz, Adonay, Torres, Marlon y Valladares, Marcela (2013). *Análisis de la Exclusión social en El Salvador 2001-2011*. Tesis de pregrado. Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. <http://abaco.uca.edu.sv/opacbfi/files/161482.pdf>
- De Vaus, David (2002). *Surveys in Social Research*. Londres: Routledge.
- Dirección General de Estadística y Censos [DIGESTYC] (2020). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2019. Informe de resultados*. San Salvador: Ministerio de Economía. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/busqueda/135>
- Erazo, María José y Aguilar, Gonzalo (2023). Dinámica de las brechas de género en el mercado de trabajo remunerado en El Salvador: ¿Cómo cambian según la edad de los hijos e hijas? En Karina Batthyany (Ed.), *Desigualdades y violencias de género en América Latina y el Caribe* (pp. 613-652). Buenos Aires: CLACSO.
- Esping-Andersen, Gosta (1993). *Los tres mundos del Estado del bienestar*. Barcelona: Edicions Alfons el Magnànim IVEI. https://www.u-cursos.cl/inap/2014/2/TEE301/3/material_docente/bajar?id=968706
- Federici, Silvia (2018). *El Patriarcado del Salario. Críticas Feministas al Marxismo*. Madrid: Traficantes de sueños.
- FUSAI (2024). *Estado Actual de la MYPE 2024: La Otra Cara de la Economía*. Observatorio MYPE. San Salvador: FUSAI.
- Jenkins, Stephen P., y Van Kerm, Philip (2014). The relationship between EU indicators of persistent and current poverty. *Social Indicators Research*, 116(2), 611-638.
- Moreno, Karen (2024, 13 de noviembre). Bitcoiners compraron edificios históricos en el centro de San Salvador por más de \$7 millones. *Revista Factum*. <https://www.revistafactum.com/ciudad-dorada-ss/>
- Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, ONEC. (2024). *Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2023*. Banco Central de Reserva de El Salvador. <https://www.bcr.gob.sv/documental/Inicio/vista/f568bebf960fc21745da7377b0c75068.pdf>
- Peña, Ximena y Uribe, Camila (2013). Economía del cuidado: valoración y visibilización del trabajo no remunerado. *Serie Programa Nuevas Trenzas*, (15), Documento de trabajo N° 191. Lima: IEP.
- Pérez Sáinz, Juan Pablo y Mora, Salas Minor (2007). *La persistencia de la miseria en Centroamérica*. San José: FLACSO. <https://www.flacso.ac.cr/es/publicaciones/libros/95-la-persistencia-de-la-miseria-en-centroamerica-una-mirada-desde-la-exclusion-social>

- Pérez Sainz, Juan Pablo (2012). Exclusión social. Una propuesta crítica para abordar las carencias materiales en América Latina. En Pérez, J. (Ed.), *Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica* (pp. 11-48). San José: FLACSO.
- Pérez Sainz, Juan Pablo (2014). *Mercados y bárbaros. La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*. San José: FLACSO. https://biblioteca.clacso.edu.ar/Costa_Rica/flacso-cr/20150204012518/mercados_barbaros.pdf
- Pérez, Juan Pablo, Segura, Rafael, y Fernández, Diego (2012). La exclusión social en Centroamérica a inicios del siglo XXI. Una interpretación cuantitativa. En Pérez, Juan Pablo (Ed.), *Sociedades fracturadas: la exclusión social en Centroamérica* (pp. 49-110). San José: FLACSO.
- Pleités, William (2021) *La economía salvadoreña después de la Independencia. Por qué estamos como estamos*. San Salvador: Universidad Tecnológica de El Salvador.
- Schuschny, Andrés y Soto, Humberto (2009). *Guía metodológica. Diseño de indicadores compuestos de desarrollo sostenible*. Santiago de Chile: CEPAL.
- Washington Office on Latin America [WOLA] (2022, 27 de septiembre). Corrupción y Régimen de Excepción en El Salvador: una democracia sin oxígeno. Pronunciamiento de WOLA. <https://www.wola.org/es/2022/09/corrupcion-estado-de-excepcion-el-salvador/>

Anexos

Anexo 1. Evolución de los indicadores de la escala de inserción laboral (2009-2023)

Indicadores escala de inserción laboral	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023
% no puede cubrir la CBA	63.4%	62.7%	64.8%	62.4%	60.7%	61.6%	63.1%	61.6%	60.7%	59.4%	58.4%	57.4%
% no posee medios de producción	62.4%	62.9%	63.0%	63.3%	64.2%	62.7%	62.2%	62.7%	62.3%	63.6%	63.6%	69.2%
% no participa en el mercado de trabajo	34.6%	34.2%	34.3%	33.6%	32.6%	34.4%	34.7%	34.4%	35.0%	34.1%	33.2%	27.1%
% posee un segundo empleo	4.5%	3.8%	3.9%	4.0%	4.7%	3.9%	3.5%	3.5%	3.4%	3.3%	3.7%	4.8%
% no posee contrato de trabajo	61.7%	61.5%	65.4%	64.1%	61.9%	59.0%	59.5%	60.8%	59.0%	59.1%	58.1%	55.0%
% no recibe aguinaldo	56.2%	71.4%	71.2%	72.6%	73.2%	75.4%	76.3%	78.9%	78.1%	77.9%	69.3%	53.7%
% no cotiza al ISSS	56.4%	56.5%	57.4%	57.6%	55.4%	55.7%	54.8%	55.2%	55.6%	55.4%	55.8%	54.8%
% con trabajo peligroso	57.7%	58.0%	59.6%	58.8%	63.4%	62.8%	57.5%	54.3%	56.1%	53.8%	55.1%	61.1%
% sin capacidad de tener un local	88.8%	88.5%	89.2%	89.6%	89.9%	87.4%	89.2%	90.3%	90.5%	89.4%	89.4%	85.0%
% sin capacidad de contratar mano de obra	77.2%	76.4%	76.4%	75.9%	74.4%	73.4%	73.0%	74.0%	75.2%	79.3%	79.0%	82.7%

Fuente: elaboración propia con base en las EHPM.

Anexo 2. Evolución de los indicadores de la escala de ciudadanía social (2009-2023)

Indicadores escala de ciudadanía social	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2023
% no puede leer o escribir	16.3%	16.0%	14.9%	14.5%	13.6%	12.9%	12.7%	12.6%	12.2%	11.6%	11.4%	10.3%
% tiene un nivel educativo menor al bachillerato	74.2%	74.6%	73.9%	72.4%	72.2%	71.1%	70.4%	73.2%	73.9%	72.0%	71.2%	71.3%
% en bachillerato	89.5%	88.7%	89.5%	88.5%	87.7%	87.5%	87.1%	86.8%	86.1%	85.6%	84.9%	81.8%
% que vive en una vivienda inadecuada	6.0%	3.8%	3.4%	3.5%	3.1%	2.7%	2.4%	2.1%	1.7%	1.7%	1.9%	3.0%
% con una casa con techo inadecuado	0.4%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.3%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.2%	0.1%
% con una casa con paredes inadecuadas	28.0%	27.8%	27.3%	26.8%	27.3%	26.1%	24.4%	24.6%	24.4%	22.4%	22.0%	21.1%
% con una casa con piso inadecuado	20.3%	20.1%	19.6%	19.3%	18.4%	17.1%	15.9%	16.0%	15.5%	14.0%	13.5%	12.2%
% con una casa sin servicio sanitario	7.2%	6.7%	6.1%	5.7%	5.6%	5.1%	5.1%	4.7%	4.5%	4.1%	3.8%	4.3%
% sin alumbrado eléctrico en el hogar	16.6%	16.5%	16.2%	14.5%	13.9%	13.7%	12.9%	12.3%	11.7%	10.5%	10.1%	11.5%
% sin servicio de cañería público en el hogar	55.9%	55.0%	56.1%	55.3%	55.3%	55.0%	55.1%	54.5%	56.4%	53.9%	54.5%	54.9%
% sin vehículo	82.4%	83.6%	84.9%	84.8%	83.3%	83.6%	83.3%	82.9%	80.1%	77.9%	77.1%	73.5%
% sin televisor	14.3%	14.3%	13.5%	12.5%	11.1%	11.2%	10.5%	11.2%	10.7%	9.8%	9.8%	12.9%
% sin tv por cable	50.4%	50.0%	50.4%	50.4%	48.5%	47.5%	46.7%	46.9%	46.5%	46.1%	46.0%	58.7%
% sin computadora	85.4%	85.0%	83.9%	83.9%	84.3%	84.5%	84.5%	84.9%	81.1%	80.6%	79.8%	42.6%
% sin internet en el hogar	n.d.	90.8%	86.4%	86.8%	85.4%	83.7%	83.6%	81.5%	80.3%	75.5%	72.5%	58.0%
% no utiliza el celular	n.d.	26.9%	24.0%	21.2%	18.2%	16.3%	16.0%	17.1%	15.6%	13.6%	12.2%	2.6%
% reside en departamento con tasa de participación electoral inferior a la media nacional	34.8%	34.9%	34.6%	34.8%	34.8%	34.1%	34.0%	34.2%	34.3%	34.4%	50.2%	n.d.
% reside en departamento con tasa de homicidios superior a la media nacional	58.2%	56.8%	59.5%	63.0%	53.0%	45.9%	46.3%	48.1%	41.3%	54.2%	30.6%	6.2%
% no recibe subsidios estatales	n.d.	n.d.	25.8%	22.7%	21.4%	20.5%	22.9%	22.0%	30.6%	36.2%	30.5%	28.2%
Existencia de notificaciones	54.6%	54.7%	54.1%	54.1%	54.2%	54.4%	54.0%	54.5%	54.4%	54.3%	54.5%	55.1%

Fuente: elaboración propia con base en las EHPM.